

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**

**Acta N° 65**

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **JUAN DE JESÚS CARDONA JARAMILLO** contra **COLPENSIONES Y SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRASPORTES SANTRA LTDA.**

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2213 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

El demandante solicita que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 23 de febrero de 1989 y diciembre de 2005, lo que ocurrió de manera ininterrumpida.

Se condene a Santra, en calidad de empleador a pagar los periodos que dejó de cotizar en virtud de la relación laboral y que fue inducido en error a continuar cotizando a Colpensiones, porque la entidad no ejerció las acciones de cobro coactivo por las semanas en mora.

Se condene a Colpensiones a que le reconozca la pensión de vejez y que le devuelva los aportes que realizó con posterioridad a que acreditó los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Así mismo los intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la ley 100 de 1993.

**Hechos**

Como fundamento de lo solicitado indica, que, nació el 31 de diciembre de 1957, cumplió 62 años en el 2019, fue afiliado al ISS el 26 de agosto de 1988.

Laboró al servicio de la Sociedad Santra, desde el 23 de febrero de 1989 a diciembre de 2005, fecha donde terminó la relación laboral.

El 3 de febrero de 2006 la señora Adriana María Muriel Ruiz trabajadora de Santra certificó la relación laboral por espacio de 203 meses, como conductor, que son equivalentes a 870.87 semanas.

Solicitó actualización de la historia laboral en razón a que existían inconsistencias con el empleador SANTRA, lo que hizo en varias fechas pues no se obtenía respuesta, como 16 de septiembre de 2016, 6 de agosto de 2020 y 9 de octubre de esa anualidad, además nunca realizó las acciones de cobro.

### **Contestación de Colpensiones**

Entidad que a través de apoderado indicó que son ciertos en general los hechos de la demanda, pero debe probarse lo afirmado.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y descuentos en salud.

### **Respuesta de SANTRA LTDA.**

La sociedad demandada manifestó que no es cierto los extremos temporales que afirma el actor, toda vez que estos no se prueban con una certificación laboral, sino con los aportes realizados a la seguridad social, además que no se trató de una sola relación laboral sino múltiples y verbales e indefinidas.

Considera que los aportes son parafiscales y en consecuencia para su cobro debe aplicarse el estatuto tributario según art. 817 y se establece una prescripción de 5 años, para el caso brilla por su ausencia la gestión de cobro que realizó Colpensiones para el pago de los aportes en mora.

De otro lado se resalta que una certificación no da cuenta de una relación laboral, ya que esta únicamente se prueba es con los aportes, solo lo que refleje esta, además fue hace 34 años y no se cuanta con soportes documentales.

El demandante solicitó corrección de la historia laboral, por lo que es reprochable la conducta de la entidad en no ejercer las acciones de cobro y pretender que la culpa recaiga es en el empleador, por eso ya le prescribió cualquier posibilidad de reclamar y Santra no puede ser condenada.

Por la negligencia de la entidad es que el actor no cuenta en su historia laboral con las 1300 semanas y por ende su derecho a la pensión.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, pago y buena fe.

### **Sentencia de Primera Instancia**

La Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **02 de febrero de 2023**, declaró que en efecto la relación laboral entre las partes tuvo como extremos **23 de febrero de 1989 y el 30 de septiembre de 2005**, sin solución de continuidad.

Condenó a la Sociedad Antioqueña de Transporte Santra Ltda, una vez que ejecutoriada la sentencia proceda a pagar el cálculo actuarial que liquide COLPENSIONES, correspondiente al tiempo referenciado por el que no realizó aportes de 244.43 semanas.

Condenó Colpensiones, a reconocer y pagar al demandante, la pensión de vejez bajo la Ley 797 de 2003, sobre un salario mensual vigente, y a partir del 1 de noviembre de 2020, por lo que liquidó un retroactivo en la suma de \$29.764.247, liquidado entre 1° de noviembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2023, a partir del 1 de febrero de 2023 una mesada pensional por valor de (\$1.160.000), autorizando los descuentos en salud.

A pagar los intereses moratorios, a partir del 13 de julio de 2021 y hasta cuando se haga efectivo el pago.

### **Recurso actor**

El apoderado no está de acuerdo con la sentencia únicamente en que no se haya declarado la inducción en error a seguir cotizando que solicita, porque por esos periodos en mora que tenía Santra como emperador, fue que siguió cotizando, sabiendo que cuando cumplió la edad 31 de diciembre de 2019 ya acreditaba las 1300 semanas exigidas.

Además, solicitó varias correcciones y no fue posible, debiendo liquidarse su retroactivo desde el 1 de enero de 2020 y no noviembre de 2020.

## **Recurso Santra Ltada**

La apoderada de sociedad demandada solicita que se revoque la sentencia, en razón a que la juez dijo que era una relación laboral única e ininterrumpida, lo que no probó el actor en el proceso y con su solo dicho no se acredita.

A los testigos no les consta la relación laboral porque uno laboró solo hasta 1991 y otra entre 1992 a 1994 y debe ser como digan los aportes que soportan la relación laboral, porque con el certificado no se prueba la relación laboral, ya que quien lo firmó no era el representante legal de la empresa.

Tampoco es posible la condena que realizó la juez a que pague un cálculo actuarial, porque aquí existe es una mora del emperador y no una omisión de la afiliación, por tanto, es Colpensiones quien debe responder con su patrimonio, porque ya prescribió a los 5 años, la posibilidad de reclamar, toda vez que no realizó las acciones de cobro coactivo, debido asumir esas moras y responder frente al demandante.

## **Recurso Colpensiones**

El apoderado manifiesta que Colpensiones no podía ejercer las acciones de cobro coactivo, en razón a que no era quien debía pronunciarse frente a la relación laboral existente.

El pago de los aportes radica en cabeza del emperador, por tanto, es quien debe proceder a responder y pagar la prestación, además el actor no probó relación laboral por esos tiempos.

El juez no podía convalidar las declaraciones y la certificación para decir, que fue relación laboral y condenar.

## **Alegatos de conclusión**

Corrido el término de traslado consagrado en la ley 2213 de junio de 2022. Colpensiones manifestó:

Solicito respetuosamente se revoque la sentencia proferida por la Juez de primera instancia; en febrero de 2023 la cual fue adversa a mi representada y en solicitud de lo anterior me permitiré ampliar alegatos.

Como quiera que una de las pretensiones de la demanda se encuentra encaminada a la declaratoria de la existencia de una inconsistencia en la historia laboral de la demandante por diversos periodos de tiempo, hecho que debe probarse que el empleador omitió sus obligaciones respecto los aportes a seguridad social de la accionante, y como consecuencia de lo anterior se ordene al empleador moroso a

pagar el reajuste de los aportes para los riesgos de I.V.M. por todo el tiempo debatido, de tal manera, es posible observar que efectivamente se esté ante la figura de mora patronal, ante la omisión de efectuar la afiliación o el reporte correspondiente en la oportunidad que debió hacerse ante el fondo de pensiones; por tanto, debe hacerse énfasis a la omisión en el pago de cotizaciones por periodos referidos por la demandante, por lo tanto es necesario hacer las siguientes consideraciones de orden legal.

Teniendo en cuenta que la relación laboral y/o el vínculo de dependencia laboral es el hecho a través del cual se desprenden las obligaciones para cada una de las partes intervinientes, y a partir de ello la obligatoriedad reglamentada legalmente de realizar aportes a seguridad social el pensiones, así mismo de la responsabilidad en cabeza de las administradoras de pensiones, entre las que se destaca la obligación de cobro prevista en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, compilado en el artículo 2.2.3.3.3 del Decreto 1833 de 2016; de lo cual debe resaltarse que es solo a partir del reporte de la novedad de la relación laboral, momento en el cual la administradora queda facultada para desplegar las acciones correspondientes; lo cual no ocurre para el caso que nos convoca, ya que de entrada lo que se pretende es declarar la existencia de una relación laboral por determinado ciclo de tiempo, situación que debe ser objeto de debate probatorio en el presente litigio, y del cual Colpensiones desconocía el contexto planteado por el accionante

Con respecto a lo anterior debe ser un juez de la república quien confirme que existió la relación laboral entre el señor Juan de Jesús Cardona Jaramillo y sociedad antioqueña de transporte Santra Ltda, en ese momento se deberá reconocer como calculo actuarial las cotizaciones durante todo el tiempo que estuvo vigente la relación laboral, mientras tanto Colpensiones está facultado por la legitimación en la causa por pasiva, al respecto y de acuerdo al interrogatorio de parte de la Audiencia de primera instancia, considero señor magistrado que no se demostró la relación laboral, toda vez que presuntamente la relación laboral existente era entre familiares, los cuales son propensos a no realizar las debidas cotizaciones o a utilizar empleos de forma informal.

Teniendo en cuenta el material documental introducido en el acervo probatorio del libelo, así, en lo concerniente a los efectos de la mora patronal en el pago de los aportes a la seguridad social, se puede predicar que a todas luces radica en cabeza del empleador la responsabilidad de tal omisión, toda vez que aquel era el responsable de registrar y aportar las cotizaciones por los periodos efectivamente laborados por la demandante, pues la entidad Colpensiones no estaba en la posibilidad fáctica de realizar el respectivo cobro coactivo y por tal razón, la responsabilidad en el pago de los aportes al sistema de seguridad social, si así se determinase, yace en cabeza del empleador y por lo tanto Colpensiones no está legitimado en la causa en el presente proceso para pronunciarse al respecto. Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada, la importancia que se acredite el presupuesto de legitimación en la causa para que las partes puedan actuar dentro de un proceso, en este sentido está el pronunciamiento realizado mediante Sentencia del 25 de mayo de 2011, expediente: 20146 del 19 de octubre de 2011, expediente 19630.

De acuerdo con la normatividad expuesta, se observa que por Parte de Colpensiones su actuar ha sido apegado a derecho, siendo necesario recordar que la inscripción o afiliación del trabajador es el mecanismo mediante el cual la administradora de pensiones tiene conocimiento de que existe una relación laboral que origina la obligación de pagar aportes de seguridad social; Antes de esa afiliación la administradora de pensiones no ejerce una acción de cobro porque no ha sido informado de la existencia del vínculo laboral, Precisamente por ese motivo se ha establecido que la administradora de pensiones no es responsable de las prestaciones socioeconómicas sino a partir de la fecha de la inscripción o afiliación del trabajador; en todo caso son hechos que deben ser sometidos a debate probatorio para determinar la responsabilidad correspondiente, reiterando que es una responsabilidad que no puede ser endilgada a Colpensiones, en razón a todo lo anterior se debe de absolver a mi representada de todas las pretensiones de la demanda, incluyendo el hecho de condenar en costas, toda vez que mi representada ha actuado en debida forma.

### **Alegatos Santra.**

El apoderado de esta sociedad solicita que se revoque la decisión de instancia, en razón a que Colpensiones está alegando mora del empleador y por ese hecho negó la prestación, lo que conlleva a que era dicha administradora quien tenía el deber de iniciar las acciones de cobro para el pago de esos aportes.

Incluso aunque en el caso existiera y se declara una prescripción por no haberse iniciado las acciones de cobro, ello en nada puede afectar al afiliado.

De otro lado dentro del proceso no se acreditó la relación laboral ininterrumpida como lo sugiere el demandante.

### **Problema Jurídico**

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos interpuestos y el grado de consulta será establecer si en el presente caso se probaron los extremos de la relación laboral entre las partes por el periodo 23 febrero 1989 y 30 de septiembre de 2005, sí la demandada debe pagar un cálculo actuarial por el tiempo que no realizó aportes, sí existió una inducción en error al demandante por la mora del empleador y ello lo obligó a seguir cotizando, sí el actor acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez, sí debe condenarse a la entidad a reconocer intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la ley 100 de 1993.

Previo a resolver considera importante la Sala hacer las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

- El señor Juan De Jesús Cardona Jaramillo nació el 31 de diciembre de 1957.

- Fue afiliado por la Sociedad Santra Ltda a partir del 23 de febrero de 1989.
- Reclamó ante Colpensiones la pensión de vejez el 12 de marzo de 2021 y fue negada porque únicamente contaba con 1100.43 semanas.
- Se aportó certificación con sello y firma de Santra sobre relación laboral con el actor.
- Al contabilizar periodos en mora acredita 1344.43 semanas en toda la vida laboral.

### CONSIDERACIONES

Procede la Sala a dar respuesta a los puntos objeto de apelación comenzado por establecer los extremos de la relación laboral que encontró probados la Juez de instancia y que la sociedad demandada desconoce.

En los términos del artículo **167 del Código General del Proceso** y el **artículo 1757 del Código Civil**, corresponde a las partes acreditar los supuestos de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman; el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

A su vez, el Artículo **60 del C. de P.** del T y de la Seguridad Social establece:

“El Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”

Y el Artículo 61 del mismo estatuto procesal, reza:

*“Libre formación del convencimiento. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.”*

Según las disposiciones transcritas, si bien es cierto el Juez debe valorar la totalidad de los medios de prueba que se allegaron al proceso según las normas de la sana crítica, esta situación no exime a las partes de cumplir con la carga procesal que les incumbe, en el sentido de otorgar al funcionario la certeza sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el supuesto de hecho de la norma en que se fundamenta la pretensión, para el caso de la parte demandante, o sobre los argumentos planteados en los medios exceptivos, si se trata del demandado que pretende sacar adelante los argumentos de su defensa.

Para la Sala tal como lo estableció la juez de primera instancia la relación laboral entre las partes sí está probada desde el 23 de febrero de 1989 hasta el año 2005 de manera ininterrumpida lo que se establece bajo los siguientes argumentos:

Lo primero es que al estudiar la historia laboral del actor se observa que fue afiliado al sistema general de pensiones por parte de la empresa Santra hoy Sociedad Antioqueña de Transportes, desde el 23 de febrero de 1989 y realizó aportes hasta septiembre de 2005, aunque aparecen algunos periodos en mora por parte del empleador.

También se allegó por la parte actora una certificación que por demás no fue tachada de falsa, la cual cuenta con sello de la sociedad demandada y firma de la señora Adriana María Muriel Ruiz, (secretaria de personal), documento del 3 de febrero de 2006 y donde certificó que el actor laboró por espacio de 203 meses para dicha empresa, sin que se pueda desconocer este documento bajo el argumento de la parte demandada de que como no se trataba del representante legal no es válido, olvidando que existen personas que lo representa.

Ahora bien, se trajeron al proceso los testimonios de los señores Iván De Jesús Tabierna, testigo que manifestó que trabajó en Santra desde el 1986 a 1997 y cuando ingresó conoció al señor Juan De Jesús, siempre manejó la buseta N° 057 que era de propiedad del señor Gildardo Cardona, afiliada a Santra, que el requisito para que dejaran mover el carro era que el dueño pagaba a Santra la seguridad social y este afiliaba al trabajador y pagaba los aportes, quien debía estar al día para poder tener el carro afiliado...

A su paso la señora Ángela María Fonnegra Mora, manifestó que laboró desde el 1992 al 1994, era la secretaria en la empresa, el señor Juan trabajó en Santra estaba cuando yo entré, manejaba la buseta 057 de propiedad del señor Gildardo Cardona, cuando me retiré él siguió trabajando allí, las afiliaciones las hacia Santra directamente y pagaba a Colpensiones, eso sí lo sé ese tema debe estar al día, era un requisito indispensable para dejar trabajar el carro...

Es importante destacar que aunque los testigos no estaban para el año 1983 ni 2005, situación que podría llevar a pensarse que no se probaron los extremos correctamente, lo cierto, es que en el caso no es posible arribar a esa conclusión, ante la contundente prueba como es la afiliación que la sociedad demandada realizó al actor desde el **23 de febrero de 1983** y que se extendió hasta el 2005, sumado a la certificación aportada, que al valorarse en conjunto no deja otro camino que llegar a la conclusión que arribó la juez a quo, toda vez que no tendría sentido que un empleador realice aportes a un trabajador que no le está prestando sus servicio y por un lapso de tiempo tan grande, además se ser responsable de elevar la novedad de retiro en caso de finalizada la relación laboral.

Lo anterior sumado a que si observamos la respuesta de la demanda realmente la defensa que enfocó la Sociedad Santra estuvo más encaminada a endilgar responsabilidades a Colpensiones como administradora por no haber ejercido las acciones de cobro de los aportes en mora, que a presentar argumentos para desestimar aquellos extremos. **Confirma** este aspecto apelado.

De otro lado y teniendo en cuenta que la juez de primera instancia condenó a la demandada a reconocer un cálculo actuarial por los periodos en mora a lo que se opone la apoderada de la parte demandada Santra; porque considera que no es aplicable dicha figura cuando lo que existe es una mora y no una falta de



afiliación, en ese sentido y con el fin de establecer sí le asiste derecho a la apelante se estudian ambas figuras así:

**Consecuencias de la no afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante la vigencia de la relación laboral y diferencia con la mora en las cotizaciones.**

Con el fin de resolver el recurso propuesto, resulta necesario precisar cuáles son las diferencias entre la **falta de afiliación** y la **mora en el pago de cotizaciones**, frente a un fondo de pensiones, debiéndose indicar que, si no se presentó afiliación frente a la AFP y no se logró vincular jurídicamente a la entidad, es claro que el empleador no se subroga en sus obligaciones.

Las diferencias entre la **mora en la cotización** y la **omisión de la afiliación** son bien explicadas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia **SL 4021 del 25 de septiembre de 2019**, en los siguientes términos:

En el caso de la no afiliación, la Corte sostiene que esta circunstancia no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación. Este último aspecto ha sido morigerado y actualmente, entre otras razones, con motivo de la entrada en vigencia del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, reglamentado por el Decreto 3798 de ese mismo año, se admite la inclusión de estos tiempos pese a no existir afiliación, **siempre que se traslade el cálculo actuarial que los represente**, en cuyo caso el sistema debe asumir el pago de la prestación y, además, se reúnan los requisitos mínimos exigidos para la correspondiente prestación.

Para ejemplificar mejor las diferencias existentes entre ambas instituciones, vale la pena citar la sentencia **T-234 de 2018**, donde la Corte Constitucional explicó las circunstancias y responsabilidades que se generan a cargo del empleador y la administradora de pensiones de cara a la afiliación y cotización, de la siguiente forma:

- 1-. Cuando no se presenta afiliación en pensiones y dicha omisión se extendió por un periodo igual o superior al establecido en la ley para el reconocimiento de una pensión, esta prestación debe ser asumida de forma íntegra por el empleador.
- 2-. Cuando la omisión de afiliación fue parcial o tardía, el empleador debe trasladar al sistema, el valor de los aportes correspondientes al tiempo laborado por el empleado, lo cual se efectúa a través del pago de un cálculo actuarial, el que una vez pagado, traslada la responsabilidad pensional a la AFP.
- 3-. Cuando el empleador afilia, pero no pago cotización, evento en el cual se está en presencia del allanamiento en mora por parte de la AFP, por lo que la responsabilidad en el pago de prestaciones económicas recae en ella.

Ahora bien, frente a este tema en cuanto el empleador no afilió al trabajador al sistema, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia **SL2603 rad. 39743** del 15 de marzo de 2017 MP Fernando Castillo Cadena dijo:

*Como en el proceso quedó acreditado en forma palmaria: (i) que hubo una relación laboral entre el señor Carlos William Tabares Vélez, este en calidad de trabajador oficial y el Municipio de Amagá; (ii) que el contrato de trabajo duró 58 días que equivalen a 8,29 semanas; (iii) que el Municipio de Amagá no afilió a su trabajador al sistema general de seguridad social en pensiones; (iv) que el señor Carlos William Tabares Vélez falleció el 10 de enero de 2003; (v) que para dicha calenda no estaba cotizando al Instituto de Seguros Sociales para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte; (vi) que el causante en el año inmediatamente anterior a la fecha de su deceso, le cotizó al Instituto de Seguros Sociales un total de 22,14 semanas; no queda otro camino que condenar al Municipio de Amagá, por la sencilla pero contundente razón de que si hubiese afiliado a su colaborador al régimen de pensiones, el sistema le hubiese reconocida la pensión de sobrevivientes a los hoy demandantes a la luz de lo estatuido en la Ley 100 de 1993.*

*Por último, se itera, para este caso, la omisión de afiliar al causante al sistema de pensiones impidió a los demandantes acceder a las prestaciones a cargo de éste, por lo que el responsable de la dicha pensión es el empleador, en los precisos términos del estatuto de seguridad social*

Y en sentencia **SL1740 de 2021** rad.39743 MP Fernando Castillo Cadena de argumentó lo siguiente:

*Para dar desarrollo al cargo, se acude a la conclusión del Tribunal relativa a que «no es aceptable jurídicamente que alguien pueda beneficiarse del sistema esperando la ocurrencia de un determinado riesgo, para en ese momento vincularse a una entidad administradora, pagar los aportes requeridos y obtener una prestación determinada[...]»(subrayado y negrilla del texto), y con tal expresión, deja entrever que el verdadero problema jurídico a resolver, se contrae a la afiliación de la actora al sistema y no «a la mora en el pago».*

*Finalmente, y como aspecto a resaltar, la decisión del Tribunal no se aleja de la línea de pensamiento de esta Corporación expuesta, entre muchos pronunciamientos, en las sentencias CSJ SL4698-2020 reiterada en la CSJ SL1740-2021 y donde se expresó que, ante la omisión de afiliación de un trabajador, como el presente caso, el responsable directo de las prestaciones que se deriven por la condición de invalidez es el empleador.*

### **De la mora de los empleadores**

Ahora bien, sobre el tema de la mora de los empleadores la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos como SL 6030 de 2017, 3399 de 2018, 3550 de 2018 y más reciente en **SL2074 de 2020** MP Iván Mauricio Lenis Gómez expuso.

*«La Sala de entrada advierte que no le asiste razón a la censura en sus argumentos, toda vez que de manera reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, si la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes en mora, es a ella a quien corresponde asumir el pago de la pensión (CSJ SL6030-2017, CSJ SL3399-2018 y CSJ SL3550-2018). Precisamente, en esta tercera providencia referida, la Sala expresó:*

*Nótese que en el anterior criterio jurisprudencial se destaca que el afiliado no puede asumir las consecuencias adversas de la omisión de un empleador que no hizo el pago oportuno de las cotizaciones que estaba obligado a sufragar, toda vez que las entidades administradoras de pensiones cuentan con mecanismos legales para exigir el pago de tales aportes y no es el afiliado quien deba soportar las consecuencias adversas de tal incumplimiento. Asimismo, dicha interpretación pondera y distribuye las cargas entre los diferentes actores del sistema de seguridad social porque, se reitera, ante el acaecimiento del riesgo asegurado el trabajador no puede quedar desprotegido ante el descuido de su empleador en el pago de las cotizaciones y la falta de cobro de la administradora de pensiones, a la que el afiliado confió el recaudo de sus aportes y a la que la ley ha revestido de todas las facultades para adelantar las gestiones de requerimiento y recaudo (CSJ SL3399-2018)” (...)*

Así mismo, es criterio pacífico de la Corte Suprema de Justicia en que no es posible endilgarle de manera automática a la administradora de pensiones la responsabilidad del reconocimiento pensional, por no haber iniciado las acciones de cobro, sin antes haber verificado la existencia de la relación laboral generadora de esas supuestas cotizaciones no canceladas por parte del empleador. SL 3692-2020 reiterada en la SL1506 del 8 de abril de 2021.

Para el caso y una vez determinado que entre las partes efectivamente existió una relación laboral entre el 23 de febrero de 1983 y septiembre de 2005, y que la Sociedad Antioqueña de Transporte Santra Ltda afilió al demandante desde dicha fecha, debe decir la Sala que frente a este aspecto le asiste razón a la apoderada apelante en cuanto que en el caso lo que existe es una mora del empleador y no es procedente la orden de pago de esos periodos en mora por medio de un cálculo actuarial, como lo estableció la juez, sino que Colpensiones cuenta con las acciones de cobro que le concede el art. 24 de la ley 100 de 1993, para que obligue al empleador moroso a realizar esos pagos.

Por lo tanto, se hace necesario **REVOCAR** la orden de la Juez, para en su lugar dejar claro que Colpensiones queda facultada para interponer las acciones cobro frente al empleador, con el fin de lograr el pago de las cotizaciones en mora.

Desestimando el argumento de Colpensiones en cuanto a que no era posible que interpusiera las acciones de cobro coactivo, porque precisamente el art. 24 de la ley 100 de 1993 lo faculta para que proceda en caso de mora en el pago de aportes por parte de los empleadores.

Ahora, la Sala no tiene competencia para pronunciarse frente a posible prescripción en relación con cobro de esos aportes, porque Colpensiones no haya ejercido las acciones cobro, en razón a que ese es un tema entre administradora y el empleador, que no fue objeto de litigio ni de demanda entre ellas, lo que tendrá oportunidad de ventilar y probar en el escenario correspondiente.

**Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez**

El artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece que tendrán derecho a la pensión de vejez, los afiliados mujeres que reúnan las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido 60 años. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementó la edad a 62 años.
2. 1000 semanas de cotización, incrementadas a 1050 a partir del 1 de enero de 2005, y en los años sucesivos a partir del 1 de enero de 2006 en 25 semanas hasta alcanzar en 2015 un número de 1300 semanas.

En lo que refiere al cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003<sup>1</sup>, se encuentra que los mismos están satisfechos, toda vez que, el actor cumplió 62 años de edad, el día **31 de diciembre de 2019**<sup>2</sup> y para aquella fecha contaba con **1344.43 semanas** de cotización, porque como quedó anotado existían periodos en mora que se tienen en cuenta, por lo que en este aspecto se debe **confirmar** la decisión consultada.

### **Disfrute de la prestación**

Para el caso el actor cumplió la edad el 31 de diciembre de 2019, pero continuó cotizando al sistema general de pensiones, donde se observa como último ciclo 30 de octubre de 2020, significando que la prestación debe liquidarse a partir del 1 de diciembre de 2020, como lo estableció la juez de instancia.

### **De la cuantía de la prestación**

En el caso no se acreditó un IBL diferente por lo que la prestación se liquida sobre el salario mínimo legal mensual y 13 mesadas, arrojando un monto de retroactivo en la suma de \$29.764. 247, liquidado entre 1 de noviembre de 2020 y el 31 de enero de 2023.

### **De la desafiliación del sistema y la inducción en error.**

Considera la parte demandante que el actor fue inducido en error, en razón a que se vio en la obligación de continuar cotizando porque cuando reclamó se le negó la prestación bajo el argumento de que no contaba con las cotizaciones requeridas, por la mora en que había incurrido el empleador.

---

<sup>1</sup> La norma establece las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 años si es hombre.  
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a 57 años de edad para la mujer, y 62 años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo.  
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015.

<sup>2</sup> Nació el día 13 de noviembre de 1955 (01/págs.19-20).

Respecto al tema la Sala encuentra que por regla general para el disfrute de la pensión de vejez es necesaria la desafiliación del sistema, esto conforme lo establecido en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 que mantuvieron vigencia luego de la entrada en rigor de la ley 100 de 1993, por así establecerlo el artículo 31 ibídem cuando indicó que se mantienen vigentes las disposiciones regulatorias de los seguros de invalidez, vejez y muerte administrados por el Instituto en aquellos aspectos inherentes a esas prestaciones.

Sin embargo, la jurisprudencia ha identificado casos en que la aplicación irrestricta de la norma no resulta ser la adecuada, siendo los de mayor trascendencia el denominados como: (i) retiro tácito y la (ii) inducción en error, en el caso la parte actora aduce que debió seguir cotizando al Sistema de Pensiones por el error en que se le hizo incurrir por la entidad.

Al respecto debe decirse que el error es una equivocada o inexacta creencia o representación de la realidad jurídica o material, que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. En materia pensional la jurisprudencia especializada le ha atribuido consecuencias en el evento en que el afiliado no obstante haber causado la prestación por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicios, y solicitado su reconocimiento en forma oportuna, se ha visto apremiado a seguir cotizando debido a una conducta renuente o negligente al momento de estudiar la procedencia del derecho o negarlo aduciendo el déficit de aportes.

La sentencia precursora dentro de esta línea es la radicado 34514 del 1 de septiembre de 2009, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al conocer el caso de una persona que solicitó la pensión de vejez cumpliendo con los requisitos, sin embargo, esta le fue negada por el **ISS** por no contar con el número suficiente de semanas, lo que llevó al demandante a vincularse al sistema efectuando nuevas cotizaciones; una posterior reclamación dio cuenta de que el demandante causó la prestación desde el primer momento negando el pago del retroactivo por existir cotizaciones posteriores, actuación desestimada por la Corte bajo el entendido que la negligencia del ISS no podía beneficiarlo en detrimento del afiliado. Tesis reiterada en la Sentencias radicados 39391 del 22 de febrero de 2011, 38558 del 6 de julio de 2011 y 44987 del 11 de mayo de 2016.

De la línea jurisprudencial citada se destacan los siguientes aspectos: (i) Debe existir una manifestación del afiliado tendiente al disfrute de la pensión de vejez, (ii) Debe haber un actuar negligente o errado de la AFP encargada de reconocer la pensión, que lleve al (iii) afiliado a seguir efectuando cotizaciones.

En el presente caso la Sala considera, que no existe la inducción en error que afirma el actor, toda vez que dicho señor para la fecha en que reclamó no contaba con los requisitos para acceder a la prestación, concretamente las semanas que exige la norma como lo es 1300, en razón a que, si bien el empleador se encontraba y mora, también lo es que a través de esta sentencia se señaló este aspecto y que la relación laboral estuvo vigente desde el 23 de febrero de 1983. **CONFIRMA** este aspecto apelado.

### **De la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993**

Para resolver este punto motivo de consulta a favor de Colpensiones se realizan las siguientes consideraciones:

Lo primero que menciona la Sala es que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia los intereses de mora aplican para todo tipo de pensiones, véase la sentencia **SL 1681 del 2020** radicado 75127 MP Clara Cecilia Dueñas y reiterada en la **3130 de 2020** la Corte concluyó lo siguiente:

*...Si bien las pensiones del régimen de transición se rigen en tres aspectos puntuales (edad, tiempo de servicios o semanas y monto) por las reglas anteriores, en todo lo demás les aplica la Ley 100 de 1993. Debido a ello, se trata de pensiones englobadas en el sistema general de pensiones, cuyas condiciones de causación son más flexibles o favorables que las del resto de pensionados...*

*Con lo anterior, la Sala abandona su criterio jurisprudencial anterior y, en su lugar, postula que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.*

*En consecuencia, el Tribunal no erró al conceder en favor de Jairo Carrillo Amaya los intereses moratorios Radicación n.º 75127 SCLAJPT-10 V.00 18 mencionados, pero por las razones acá expuestas. Lo anterior, en la medida que la pensión otorgada al demandante es de estirpe legal (L. 71 de 1988), y fue concedida en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 199...*

De otro lado la Corte Suprema ha manifestado que los intereses moratorios no se aplican de manera automática, sino que se debe establecer si la entidad enmarca dentro de algunos de los eximentes que tiene establecidos esa Corporación. Sentencia **SL370 de 2020** y **SL1020 de 2022**.

Para el caso concreto se tiene que al analizar la negativa de la entidad de la pensión de vejez la Sala considera que existe un eximente que la libera del pago de los intereses de mora, en razón a que para cuando reclamó el actor no era claro el derecho, toda vez que sólo en esta sentencia se estableció la posibilidad de contabilizar los periodos en mora por parte de empleador, Santra, partiendo del hecho de haber declarado que en efecto la relación laboral estuvo vigente desde que se presentó la afiliación al sistema general de pensiones, pues la inducción en error se presenta cuando al momento de solicitar la prestación es diáfano el derecho y sin embargo se niega el mismo.

En razón a este argumento la Sala **REVOCA** la condena a Colpensiones en aspecto, en su lugar dispone que al momento de reconocer la prestación lo haga debidamente indexada.

### **Prescripción de mesadas**

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la reclamación fue realizada el 21 de marzo de 2021 y la demanda interpuesta en el mismo año.

### **Costas**

Sin costas en esta instancia.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**REVOCAR parcialmente** la providencia de primera instancia proferida por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día **02 de febrero de 2023**, en el proceso ordinario laboral adelantado por el señor **JUAN DE JESÚS CARDONA JARAMILLO** contra **COLPENSIONES Y SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRASPORTES SANTRA LTDA**, en cuanto la orden de pagar cálculo actuarial, para en su lugar declarar que Colpensiones queda facultada para interponer las acciones de cobro frente al empleador, por las cotizaciones en mora al empleado demandante.

**SE REVOCA** la condena impuesta a cargo de Colpensiones por intereses moratorios establecidos en el art. 141 de la ley 100 de 1993, en su lugar debe proceder a reconocer la pensión al actor debidamente indexada. **En todo lo demás se confirma la providencia.**

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

### **LOS MAGISTRADOS**

  
**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

Radicado No. 05001-31-05-015-2021-00224-01  
Radicado Interno: P2883  
Asunto: Revoca y confirma sentencia.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**





SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Juan De Jesús Cardona Jaramillo
Demandado	Santra y Colpensiones
Radicado	05001-31-05-015-2021-00244-01
Decisión	Revoca y confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 31 de marzo de 2023 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
SECRETARIO